

## ***La Patagonia protesta. Recursos, política y conflictos a fin de siglo***<sup>1</sup>

Orietta Favaro  
Graciela Luorno<sup>2</sup>

La historiografía argentina destina vastos espacios y las editoriales privilegian los estudios de científicos sociales cuyos trabajos tienen como área de análisis, - independiente del objeto de estudio - en general, la pampa húmeda y litoral argentino. Sin poner en duda la científicidad y seriedad académica de esos trabajos, una deficiencia importante de la historiografía, es el escaso tratamiento destinado a los análisis sobre las provincias argentinas. Más aún, cuando se trata de parte de esas provincias, los estados que integran la Patagonia argentina.

En un trabajo anterior<sup>3</sup> se plantea el problema, avanzando en el estudio de Neuquén y Río Negro, en el norte de la Patagonia. En este contexto, nos interesa analizar, comparativamente, los casos de las provincias patagónicas: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz<sup>4</sup>. No se estudia La Pampa, ya que forma parte del área pampeana y Tierra del Fuego, porque es una provincia reciente (1994).

El objetivo, es entonces, reflexionar en el contexto de la historia reciente argentina, sobre las resistencias, protestas y conflictos de los sujetos sociales involucrados en áreas subnacionales poseedoras de recursos, -entre otros - los hidrocarburos, frente al ajuste y las privatizaciones de los años 1990.

---

<sup>1</sup> El presente trabajo forma parte de una investigación que se realiza en el marco del GT de CLACSO: Historia Reciente. Sujetos sociales, poder y representación en América Latina y el Caribe.

<sup>2</sup> Docentes e investigadoras del Centro de Estudios Históricos, de Estado, Política y Cultura (Cehepyc), miembro de Clacso, en la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.

<sup>3</sup> Favaro, Orietta; Graciela Luorno; Horacio Cao, "Política y protesta social en las provincias argentinas", en GT Historia Reciente, Bs.As., Clacso, 2004, en prensa.

<sup>4</sup> La región patagónica, con Tierra del Fuego incluida, representa el 35% de la superficie del país, el 7% de la población y el 7% del PB.

## **Protestas, resistencias y conflictos en los noventa**

Las protestas y resistencias de los sujetos sociales en la Argentina de los años '90, frente a la política estatal de ajuste fiscal y privatización de empresas públicas, está condicionada por las secuelas de la dictadura militar que provoca la alteración en la direccionalidad peronista del movimiento obrero. Se constituyen sujetos y organizaciones que, aunque sin demasiada articulación, asumen la forma y dinámica propia de una resistencia característica de las transformaciones operadas en el régimen de acumulación que emerge con fuerza en tiempos de Menem, que “no termina con la centralidad de los trabajadores en la resistencia popular”, pero éstos deben asumir su propia diversidad, tanto en su actividad territorial como sindical. Es decir, los años '90 muestran novedades al interior del movimiento obrero<sup>5</sup>. Expresiones signadas por la inorganicidad, que se indican a través de diferente configuración, con una desarticulación del activo militante, organizado por los sindicatos, grupos y partidos políticos<sup>6</sup>. El sujeto de la protesta, en tiempos que se da el disciplinamiento social y sindical lleva a que, la mayoría de las acciones tienen como objetivo reivindicaciones inmediatas y pocas orientadas a modificar las políticas del gobierno.

Las protestas cuentan como punto de partida, la desarticulación de la sociedad del trabajo y el retiro del Estado como garante y promotor del bienestar y se dan en localidades patagónicas donde el peso de la población en su relación con el estado provincial o con la actividad industrial es muy importante. En algunas oportunidades alcanzan un pico de intensidad en relación a la crisis que se presenta, al alcance de la participación y los métodos utilizados que la convierten en un conflicto social con una variedad de protagonistas quienes accionan cuando se crea la oportunidad política, en una unidad de intenciones, sentimientos y emociones, con intereses que se elaboran en el escenario donde actúan. El

---

<sup>5</sup> Gambina, Julio y Campione, Daniel (2003), “ La vereda de enfrente. La lucha de los de abajo”, en *Los años de Menem. Cirugía mayor*, Bs.As., Centro Cultural de la Cooperación, 173-178.

<sup>6</sup> Gambina, Julio y Campione, Daniel, *Los años de Menem.*, op.cit.

conflicto, excepto en las fábricas recuperadas<sup>7</sup>, sale del lugar del trabajo y se entrelaza con pobreza, la precariedad, la desocupación. Es que la tradicional relación del sindicalismo con el peronismo pone en entredicho el monopolio sindical de la representación, por ello, se apela a otra organización – la CTA - que incorpora desde sus inicios a los desocupados y propone identificar como ámbito de organización de la clase obrera, no ya la fábrica o el lugar de trabajo, sino el territorio, reconociendo a las organizaciones en términos de igualdad con los sindicatos.

### **La sociedad patagónica entre el ajuste y la privatización**

En este orden de cosas, recordemos que tradicionalmente en la Argentina, la explotación petrolera y carbonífera se concentra en dos empresas estatales: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Su sola presencia en el mercado, incluye una acción social, que permite dejar de lado cualquier cálculo tradicional de rentabilidad empresarial. Los cambios desde 1991 conlleva impactos sociales muy profundos en las áreas de estudio, ya que la extracción y explotación de recursos en el sur argentino constituye un factor estratégico para el desarrollo integral de la zona de influencia de la actividad. A diferencia de los procesos agro-industriales, la actividad minera, ofrecen repercusiones intra-regionales ya que la cesión del recurso por medio de la regalía a los gobiernos de las provincias donde está localizado el mineral por parte de las empresas extractivas, si bien provee a las mismas de importantes ingresos fiscales, el excedente obtenido por las mismas en su actividad local se remite fuera de la región <sup>8</sup>.

La denominada Reforma del Estado en la década del '90, supuso entre otras cuestiones, la desregulación del mercado, el predominio del capital financiero, la re-composición de la tasa de ganancias de los grupos económicos

---

<sup>7</sup> Un caso interesante es el de la Fábrica Zanón en Neuquén, ver Aiziczon Fernando, "Neuquén como campo de protesta", en Favaro, Orietta (coord.) (2005), *Sujetos Sociales y Política. Historia Reciente de la norpatagonia argentina*, Bs.As., La Colmena.

<sup>8</sup> Rofman, Alejandro (1999), *Las economías regionales a fines del siglo XX*, Buenos Aires, Ariel, pp. 91- 96.

nacionales, extranjeros y los bancos; siendo el ajuste y el proceso de privatización de las empresas estatales, sus aspectos más conocido.

Resulta llamativo e interesante comparar las protestas y movilizaciones en los casos de estudio. En Neuquén la protesta y movilización de la población cutralquense se produce en 1996 y 1997 cinco años después de producida la venta de la empresa estatal (YPF), en un espacio donde se mantiene la industria y el sujeto social de esa industria, el obrero petrolero. Si bien hubo promesas a los habitantes, por parte del gobierno local, la protesta de los cutralquenses se plasma en un conflicto y en la medida que avanza, afirma su identidad al adquirir los protagonistas la percepción de la crisis y la fisura en el orden político. Aunque en este caso, la estrategia termina escurriéndose, los procesos compartidos y las decisiones colectivas permiten aunar los esfuerzos, pasando de la inorganicidad a la organicidad territorial. Con el corte de ruta colocan una forma visible de conflicto que permite la aparición de la asamblea y la democracia directa sin enlaces con los sindicatos y políticos. No se desconoce al gobierno, aunque si a las mediaciones políticas, lo cual hace que los protagonistas se sienten a negociar con aquel, de igual a igual, a partir de la relación de fuerza alcanzada por el corte de ruta y la asamblea.

Es necesario recordar que el abandono de la comunidad ypefiana oscurecida por un tiempo ante la información que se brinda y por las indemnizaciones ofrecidas, congela el estallido de las 'puebladas'. Esto se explica, por una parte, porque el gobierno neuquino al aceptar la privatización de YPF, le asegura a la población cutralquense el establecimiento de una empresa de fertilizantes, a lo que se debe sumar que las importantes indemnizaciones recibidas por los ex ypefianos, destinadas a actividades que, si bien saturan el mercado, retrasan la percepción de la crisis. Por otra parte, se produce un lento desmantelamiento de la estructura social de la empresa y de la política de contención hacia los trabajadores y por extensión, hacia todo el pueblo que se sostiene en la principal fuente de trabajo. Se trata no sólo del fracaso de los pequeños y medianos emprendimientos de tipo familiar, sin asesoramiento ni del estado ni privado, como kioskos, fábrica de trapos de piso, de pañales, de

zapatillas, establecimientos avícolas, viveros, etc, como también se desmorona lentamente “... la vida comunitaria (que) gira en torno a la empresa, que controla el hospital, los servicios, el club, provee de elementos básicos, otorga subsidios familiares y bonificaciones, buenos salarios” (...)”...ascenso social, cobertura de salud y acceso a la vivienda, proveedurías, cines, instalaciones deportivas de todo tipo, incluyendo estadios y equipos de fútbol por barrios”<sup>9</sup>. Por lo tanto, cuando el gobierno de Felipe Sapag – en el marco de la interna partidaria del MPN - anuncia la ruptura con la empresa Agrium (de fertilizantes), se produce el detonante a una situación de tensión e incertidumbre que había provocado más de 5000 desocupados en un población de alrededor de 50.000 habitantes<sup>10</sup>, estallando la primera pueblada (1996). La segunda protesta, un año después, vino de la mano del conflicto docente. La huelga de los trabajadores de la educación en Neuquén, se inicia como lucha sectorial, adquiriendo un carácter masivo que permite sumar a la comunidad educativa y a otros sectores sociales, mostrando a nivel nacional que se puede combatir desde los sindicatos. El conflicto, se da en el contexto de las medidas de ajuste del gobierno provincial, a la sazón a cargo del gobernador Sapag, exigiendo además, la derogación de la Ley Federal de Educación (LFE). Adquiere de este modo las características de confrontación, más que de conciliación (tendencia que sustenta la mayoría de las conducciones sindicales del país y la Ctera), pero también combinan métodos nuevos como la asambleas de base con un fuerte protagonismo de los docentes en la toma de decisiones. Ello aumenta el acuerdo de la comunidad educativa hacia la demanda de los docentes, el conflicto dura 35 días y a pesar de las medidas coactivas adquiere más fuerza cuando el pueblo cuatralquense decide cortar la ruta para apoyar esta reivindicación de la Asociación de Trabajadores de la Educación Neuquina (Aten).

---

<sup>9</sup>Klachko, Paula, “Las consecuencias políticas y sociales de la privatización de YPF. El impacto en las localidades de Cutral Co y Plaza Huinul”, en *Realidad Económica* (2005), Bs.As., Iade, 209, pp. 32-56.

<sup>10</sup>Favaro, Orietta, Arias Bucciarelli, Mario e Luomo, Graciela, “La conflictividad social en Neuquén. El movimiento cuatralquense y los nuevos sujetos sociales”, en *Realidad Económica* (1997), Bs.As., Iade, 148; Favaro, Orietta, Arias Bucciarelli, Mario e Luomo, Graciela, “Políticas de ajuste, protestas y resistencias. Las puebladas cuatralqueses”, en Favaro, Orietta (ed) (1999), *Neuquén. La construcción de un orden estatal*. Neuquén, Cehepyc/Clacso -UNComahue.

La protesta se amplía a gran parte de la provincia de Neuquén, dando lugar, según algunos autores, a una situación particular, insurreccional, que frena la aplicación de la LFE, se recuperan los puestos de trabajo y se mantienen los derechos laborales; no obstante, las diferencias ideológicas internas dentro de Aten, - en las últimas asambleas - permiten que se acepte las condiciones propuestas por el gobierno local con el compromiso de continuar la lucha por Cutral Co en el marco de la CTA. La nueva situación, que dentro del sindicato provoca una profunda fractura, - aún sin saldarse -, lleva no sólo al debilitamiento del gremio docente, sino al abandono del los habitantes cutralquenses, a la represión de la gendarmería, la muerte de Teresa Rodríguez y la constante acusación de parte de cada uno de los intervinientes en este doble conflicto, de traidores (al interior de los docentes- al interior de los piqueteros–fogoneros de las localidades petroleras)<sup>11</sup>. A pesar que desde las localidades petroleras se pide la renuncia del gobernador, este hecho queda en el terreno discursivo; no obstante produce la destitución del intendente, perdiendo el MPN las elecciones en esa localidad desde las puebladas. Cutra Co es una de las pocas ciudades neuquinas donde no gobierna el partido local. La respuesta al conflicto es política, la sociedad cutralquense, - donde por años reside la familia Sapag y se conforma el MPN -, le quita representatividad al partido local <sup>12</sup>.

En Río Negro, coincidiendo con el clivaje nacional que significa el '95, es posible pensar el accionar sindical de los empleados y docentes provinciales en dos fases o momentos. A comienzos de 1995, los gremios estatales protestan cortando las calles, ocupando los edificios públicos, concentrándose en las plazas, colocando radios abiertas, ejecutando movilizaciones y retención de servicios, situación que da cuenta de formas de acción y de unidad en las medidas, frente a

<sup>11</sup> Sobre el tema de la huelga docente en Neuquén en 1997, ver Petruccelli, Ariel (2005), *Docentes y piqueteros. De la huelga de Aten a la pueblada de Cutral Co*. Bs.As., El Fracaso-El Cielo por Asalto.

<sup>12</sup> Recordemos que después de las protestas en los enclaves petroleros, se crea en 1996 los Planes Trabajar (PT), diseñados por el MTSS y los economistas del Banco Mundial que cofinancia el programa el primer año. Los PT funcionan hasta el 2001 y son distribuidos a las provincias, cuyos gobernadores deciden los municipios a los que se giran los fondos; por lo tanto, el clientelismo del PJ y de la UCR, según donde fuera, está presente en la asignación de los recursos. Para mayor información ver, Lodola, Germán, "Protesta popular y redes clientelares en la Argentina: El reparto federal del Plan Trabajar, 1996-2001", en *Desarrollo Económico* (2005), Bs.As., Ides, 176.

al atraso en el pago de los salarios. Superando el clásico aislamiento sectorial, los congresos extraordinarios de estatales en diferentes localidades de la provincia, son los escenarios en la toma de decisiones para la lucha, como también son acciones en oposición a los bonos estatales, con los que se pretendía pagar los salarios a los rionegrinos. Esta primera etapa (1991-95), se encuentra signada por las 'crisis financiera' en la provincia, incrementada por el desmanejo del gobierno y la política de acompañamiento local a la creación de empresas vinculadas al poder político con propósitos prebendarios y clientelísticos<sup>13</sup>. El problema salarial es el eje de las acciones colectivas organizadas que plantea un mayor grado de unidad en la acción y que cuenta con el apoyo de otros sectores de la sociedad. La segunda etapa (1995-99) que corresponde a la asunción del nuevo gobierno, el nudo del conflicto pasa por la defensa de la Caja de Previsión Social, los gremios se oponen a que se transfiera a Nación; se genera así la emergencia de dos líneas sindicales, que conducen a la ruptura del Frente de Estatales Rionegrino (FER). La primera, representada por Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), adhieren a la posición oficial de la transferencia mientras que las asociaciones que conforman la CTA, se opone a la misma y presentan un proyecto alternativo para la permanencia de la Caja en la provincia y a través de la convocatoria de un congreso educativo provincial se abocan a elaborar una propuesta, logrando que no se apliquen los cambios en el marco de la LFE<sup>14</sup>. Señalemos que, las formas de organización multisectorial se multiplican en Argentina en el período que comienza con los hechos del 2001, sin embargo, el surgimiento de multisectoriales en Río Negro, La Pampa, Santa Fe y la Mesopotamia, se da en relación a problemas sociales urgentes, entre ellos, los remates de propiedades, el retraso en el pago de salarios, etc. y en otros casos, surgen para situaciones de crisis política. Las multisectoriales, como las asambleas populares, se instituyen como frentes amplios que ponen en movimiento a sectores sociales intermedios y crean

---

<sup>13</sup> Para mayor información, ver Favaro, Orietta e Luomo, Graciela, "Poder Político y estrategias de reproducción en los territorios de Neuquén y Río Negro, Argentina, 1983-2003", en Favaro, Orietta (coord.) (2005), *Sujetos sociales y política en la historia reciente de la norpatagonia argentina*, Bs.As., La Colmena.

<sup>14</sup> Gómez Daniel, Secretario General UNTER, Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Memorias 1994-1996; *La Escuela en marcha. El periódico de la Unter*, marzo 1995-nov.1995, N° 5 y 7.

condiciones para coordinar a los trabajadores con los productores primarios, los comerciantes, pequeños y medianos empresarios y sectores de la iglesia. Por lo tanto, en su interior se produce una lucha política intensa entre una posición que limita el programa de acción con estrategias negociadoras y otra que apunta a una participación hegemónica de los trabajadores dentro de este frente único. La multisectorial rionegrina organizada a partir de comisiones internas, sindicatos de base, organizaciones de desocupados y jubilados ( estos últimos actúan por medio de coordinadoras), se diluye y fracasa, en especial por la ruptura entre las organizaciones sindicales.

En el espacio rionegrino, el petróleo no es el recurso central de la provincia, pero su explotación va en ascenso en algunas áreas, entre ellas, Catriel con la fuerte presencia de empresas privadas. En este sentido, entre 1977-1980, esa área con reservas identificadas se entregan por contrato mayoritariamente al capital privado. Recordemos que en 1959 se inicia la construcción del oleoducto Catriel-El Medanito. Los yacimientos de mayor producción en el territorio provincial son: Señal Picada (YPF), Entre Lomas (Perez Companc), Barranca de los Loros (YPF), El Medanito (YPF), Medanito SU-25 de mayo (Perez Companc-Bridas), los que aportan el 71% del total de la producción rionegrina. Con la privatización de YPF, la mayoría de los trabajadores son indemnizados y se establecen en otros lugares. La inestabilidad del asentamiento poblacional motivado por el hecho que la explotación del recurso incentiva la radicación de población que proviene de otras provincia y localidades, es la que migra cuando se produce la privatización<sup>15</sup>. En este escenario el retiro de la empresa estatal es gradual y para los años 1990 YPF tiene pocas explotaciones, operando sólo en Señal Picada. Frente a esta situación, el gobierno provincial con el apoyo de la Nación, lanza propuestas alternativas vinculadas al agro – en el área de Catriel - para los hombres y mujeres que permanece en el lugar ; de modo que ello explica en parte, la casi inexistencia de conflictos en esa localidad <sup>16</sup>.

<sup>15</sup> El origen de los trabajadores petroleros en Catriel se clasifica por rubros: perforadores catamarqueños, inyectores santiagueños, ingenieros de Mendoza, geólogos de Córdoba y La Plata. El lugar tiene mucha importancia hasta los años '80 porque no se hallan nuevos yacimientos. Testimonio Oral. R.G., geólogo, junio de 2005.

<sup>16</sup> Antes de 1959, Catriel cuenta con 537 habitantes, en 1970 asciende a 5322, que en 1990 alcanzan 18.500. Hoy la población oscila alrededor de los 12.300 habitantes.

En el caso de Chubut, es importante referirnos a la desaceleración del crecimiento económico en los años ochenta, con un fuerte aumento de desocupados, enmarcado en el agotamiento de los regímenes industriales de los '70, que impactan de modo diferencial sobre distintas ciudades de la provincia, en particular en Puerto Madryn y Trelew, plasmándose en una merma del crecimiento del nivel de producción del sector industrial, vinculado a la actividad textil y a la metalurgia de aluminio<sup>17</sup>. Después de haber sido la actividad textil generadora de empleo, la tendencia se debilita a mediados de los ochenta, haciéndose visible la crisis hacia fines de la década<sup>18</sup>. A ello se agrega el deterioro de la producción agropecuaria, desplazada por la pesquera como el rubro más importante dentro de las actividades primarias, sosteniendo la actividad económica por su significativa participación en el producto bruto de las ciudades costeras alrededor de Puerto Madryn. Así, Comodoro Rivadavia pasa a ser la ciudad de menor crecimiento relativo en esa década si se toma en conjunto las localidades más importantes<sup>19</sup>, a lo que debe anexarse la disminución de los volúmenes de producción petróleo de YPF y la rigidez del sector que contrae la oferta de puestos de trabajo<sup>20</sup>. Ahora bien, en Comodoro Rivadavia impacta con intensidad la crisis generada por las reformas de los '90, dando lugar al más alto índice de desocupación de la Patagonia, con el 50% del PEA que se encuentra sin trabajo. Esto se relaciona con la política YPF en el contexto de la privatización, ya que como se sabe – la actividad petrolera es inductiva de otras actividades, por lo cual, cualquier modificación en la modalidad empresaria supone efectos determinantes en el área

---

<sup>17</sup> Recordemos que Puerto Madryn – puerto de aguas profundas con más de sesenta mil habitantes - es la localidad chubutense, en la que se encuentra instalada la planta de aluminio Aluar. Desde Trevelin, a 500 km al oeste de Puerto Madryn se la provee de energía eléctrica, a través de la Central Hidroeléctrica de Futaleufú. La empresa exporta el 74% de su producción, mayoritariamente a países del norte de América.

<sup>18</sup>Según un informe elaborado a fines de 1996 para el gobierno de Chubut, habían cerrado 36 de las 63 fábricas textiles instaladas en las principales ciudades de la provincia. Más elocuente es el dato vinculado a la desocupación: en las ciudades valletanas, de los 5400 trabajadores de la industria textil a mediados de los años '70, hoy quedan 1764 operarios, en Ibarra, Horacio (2005) "Estado, Economía y Sociedad. Trelew y su hinterland: 1989-1999", Informe de Investigación, UNSJB, Chubut, policopiado.

<sup>19</sup>Comodoro Rivadavia crece el 28.8%, Trelew el 48.1% y Puerto Madryn el 119.2%, en Márquez, Daniel, "Crisis ocupacional y programas para la generación de empleo: Algunos indicadores para el análisis de Comodoro Rivadavia, 1990-1995", en Agustín Salvia y Panaia, Marta (comp.) (1997), *La Patagonia privatizada*, Bs.As., CEA-CBC, 14, p.171.

<sup>20</sup> Es la época del Plan Houston y Petroplán.

<sup>21</sup>. La brusca reducción de personal en las empresas, en general, que se desempeñan en el Complejo San Jorge ( norte de Santa Cruz y sur de Chubut), provoca una fuerte contracción no sólo en otras actividades como la construcción, comercio e industria manufacturera, sino en su totalidad en la economía chubutense. De este modo, las mujeres emergen como las que 'trabajan', ubicándose en la franja de subocupadas con horario reducido, en servicios personales y comercio minoristas. Si bien el estado local crea instituciones para ofertar empleo, es el Estado nacional el que pone en marcha los Planes Trabajar (PT) en 1996, luego de las protestas, precisamente, en enclaves petroleros, además del que se analiza, los de Cutral Co-Plaza Huincul (Neuquén) y Tartagal - Mosconi (Salta).

Al retirarse el Estado nacional, se produce un fuerte impacto en la población que, desocupada, busca alternativas como la autoorganización empresaria, ingresar en la administración pública, crear microemprendimientos, cooperativas de trabajo, etc, es decir, una multiplicidad de actividades y nuevos agentes económicos que no ocultan el conflicto producto de la privatización. Se pone fin a la presencia estatal en su doble papel de impulsor del desarrollo en un área productiva - en el contexto del ISI - y garante de la integración territorial. Antes de la privatización de YPF, en los '90, el conflicto social estalla en varios núcleos urbanos de esa provincia, en particular, en Comodoro Rivadavia. El ajuste fiscal que se aplica en la provincia, recae fundamentalmente en los empleados públicos del estado y servicios y el atraso en el pago de los salarios lleva a acciones individuales y colectivas. En este caso, nuevamente los docentes son motorizadores del *chubutazo* (octubre de 1990), que provoca la renuncia del gobernador Néstor Perl, con juicio político de por medio. En este conflicto tienen un rol destacado los trabajadores del sector público que en numerosas asambleas toman decisiones con la presencia de dirigentes de ATE, de la Asociación Trabajadores de la Educación Chubutense ( Atech) y la participación de dirigentes de los partidos opositores ( UCR, PACH y MID), quienes se solidarizan con el reclamo. El justicialismo, no logra resolver la crisis agravada por las fracturas

---

<sup>21</sup> Márquez, Daniel, " Crisis ocupacional y ...", op.cit.

internas, los reclamos y movilizaciones intensifican el conflicto frente a la soledad del gobernador que ni siquiera recibe el apoyo del gobierno nacional, al cual adhiere. Los diferentes sectores que participan llevan una acción conjunta a partir de intereses contrapuestos, los docentes, los padres, el sector público y de servicio. Pero además, igual que en Río Negro, es dable destacar la labor ejercida por las comisiones multisectoriales, conformadas por la representación de distintos sectores de la comunidad chubutense (en ellas es importante destacar la presencia de estudiantes secundarios y universitarios), los barrios, organismos e instituciones de la comunidad. No obstante la tareas de la misma, fracasa, pues contradictoriamente está presente la unidad y la desarticulación; ya que no logra articular un frente con acuerdos básicos, que pueda presentar alternativas y colaborar en la búsqueda de soluciones. Y no sólo en la Multisectorial por razones políticas o ideológicas, sino merece subrayarse el caso de Supe, el sindicato de los petroleros que, a pesar las concesiones de las áreas del recurso y la privatización de la empresa, no colabora en la percepción de la crisis, de modo que las indemnizaciones a los empleados de la empresa estatal que se pliegan de este modo al retiro voluntario, provocan tiempo después, un importante número de desocupados (Comodoro Rivadavia, tiene en 1993, el mayor índice de desocupados del país). Es decir, el Estado en alianza con las fracciones burguesas que pretenden la recomposición del capital, presiona para la liberalización y precarización de las condiciones de trabajo, con una fuerte restricción de la capacidad negociadora del sindicalismo que ya no tiene el papel de contención social del pasado, a lo que debe agregarse la sutura que proporciona la ideología de la resignación, el individualismo y el miedo.

Respecto de Santa Cruz, también enclave económico de empresas estatales ( YPF, YCF y Gas del Estado), con escasa industrialización y mayoría de población empleada en servicios derivados de estas actividades, construcción y comercio, a pesar que se constituyen en el núcleo del desarrollo económico provincial y principal fuente de empleo, aportando el 70% de las regalías al presupuesto local hacia los años 1980. En esta provincia, la crisis de las regalías en 1987, por los precios internacionales del petróleo, afecta la percepción de la

misma y con ella, el pago de salarios. En un principio, el estado provincial intenta absorber la crisis, pero en mayo de 1990 – en una situación similar a Chubut –, se produce una importante movilización, protesta y huelga de los estatales, por los salarios atrasados. Participan varios sectores y gremios, la administración pública, los docentes, los municipales y los judiciales; hechos que producen el derrocamiento del gobernador Ricardo Jaime del Val. Este había intentado frenar el conflicto con un aumento salarial imposible de efectivizarse que sólo intensifica la protesta. La represión sólo complica la situación política pues lleva al acuartelamiento de la policía en función que el poder ejecutivo no se hace cargo de las órdenes impartidas a efectos de ‘frenar’ el conflicto. El juicio político al gobernador lo promueve la propia fuerza gobernante: Partido Justicialista (PJ) que, debido a sus fracturas intrapartidarias: Del Val (ganadero, de la zona sur, delfín de Puricelli, ex gobernador entre 1983-1989 y futuro presidente del justicialismo local), Flores, del Movimiento Renovador Peronista (MRP) y Kirchner (Frente para la Victoria Santacruceña, - FVS -, desde 1987 intendente de Río Gallegos).

En la interna peronista a nivel nacional: Cafiero Vs Menen, Del Val se inclina por este último y los otros, por Cafiero. No obstante, Del Val cuyo gobierno coincide con Menen, no encuentra en este apoyo para sortear la crisis en su provincia. Los poderes políticos se hacen ingobernables frente a la situación económico social y el gobernador es destituido en junio de 1990, reemplazado por Granero primero (que forma parte del frente que lleva a Del Val al gobierno y pertenece al MID) y luego por García. Los acontecimientos se dan en el marco de un débil rol de la oposición frente a la crisis. El conflicto social se acelera en la medida que la interna política se traslada a la sociedad y simultáneamente a que en esa provincia hay una tarea contundente de defensa de YPF y de los trabajadores por parte de Supe. Se anexa a ello, la tarea de los mineros de Río Turbio por la privatización de YCF, de modo que se une la protesta de unos y de otros, con acciones concretas como la toma de la mina. En este contexto, Néstor Kirchner se hace cargo del gobierno local a partir de diciembre de 1991, realizando los ajustes y reordenamientos administrativos para el saneamiento

financiero que le permite pagar los sueldos, sin desprenderse en forma compulsiva de personal, ya que la casi totalidad de los salarios provienen del estado santacruceño.

Desde 1994 el yacimiento carbonífero de propiedad estatal-provincial, se mantiene bajo la administración y gerenciamiento privado en la forma de una sociedad anónima: Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) conformada entre un holding del empresario Tasselli y el holding del sindicato FATLYF (Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza). En el mismo año, una movilización popular y numerosas asambleas donde los trabajadores denuncian el caos en la empresa y el claro objetivo del concesionario de vaciar la misma, conducen al corte de la ruta 40 en Río Turbio y años más tarde, la situación de la cuenca minera lleva a que se repita la experiencia del '94. Ante el avance del concesionario sobre los salarios de los trabajadores, las condiciones laborales, el deterioro de la explotación de la mina y los contratos precarios, conducen a la toma de la empresa y a movilizaciones en Río Turbio y Río Gallegos. Si bien el conflicto es el más duro desde el inicio de la concesión, se destraba a partir del acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, entre la empresa y ATE, convirtiéndose en un fracaso para los trabajadores. En 1999 se conforma una agrupación que plantea el control obrero de la empresa estatal, esto conduce a la confrontación entre dos sectores sindicales: la lista verde que responde a Víctor De Genaro y la lista negra que se define como 'clasista, por la democracia y anticapitalista'. Estas posiciones emergen en el contexto de la inflexión nacional del 2001, situación que, sumada a las deudas de salarios y despido de obreros contratados, provoca la conformación de una asamblea comunitaria que realiza una movilización desde la cuenca de Río Turbio hasta Río Gallegos y finaliza con el cese de la concesión; regresando la empresa a producir bajo control estatal. Hay preocupación de los trabajadores cuando se discute la perspectiva de la mina fijando su rumbo, con el aporte de una larga lista de organizaciones invitadas a participar con sus propuestas técnico productivas y posiciones políticas <sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> *Página 12, 03/07/02 y 13/09/02.*

En síntesis, la cuenca San Jorge es una subregión dentro de la Patagonia que tiene población en las zonas urbanas, escasa en las otras y una sociedad de constitución reciente debido a la incidencia de población de diferente origen, extranjeros europeos y de países limítrofes. La actividad económica predominante es de signo extractivo primario exportador al área pampeana, puestos de embarque y desarrollo de localidades en concomitancia con la actividad petrolera, central en el región: Comodoro Rivadavia (1907), Cañadón Seco (1944), Caleta Olivia (1960), Pico Truncado y Las Heras (1993) <sup>23</sup>. Yacimientos Petrolíferos Fiscales había sido el agente productivo, que sostiene la actividad y dinamiza la zona<sup>24</sup>.

Contrariamente a las otras provincias, el conflicto en el sector petrolero y en el resto de las empresas privatizadas es fuerte; se inicia inmediatamente después de la venta, con ciclos de gran intensidad, interviene ATE e incluso los propios gremios petroleros privados en las acciones y denuncias a la política ejecutada por el menemismo.

### **Conflictos por el cierre de empresas estatales**

En este orden, es necesario reflexionar sobre el cierre de Hipasam (Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera) en Río Negro. La mina de hierro que otrora fuera la más grande de Latinoamérica<sup>25</sup>, se ubica en un espacio originalmente de asentamientos transitorios de poblaciones nativas; convertida en empresa estatal en la década del '40, implica un enclave económico en la zona costera rionegrina. Tras el descubrimiento del hierro en esos años, la localidad tiene un apogeo económico treinta años después con la explotación minera por parte de la firma Hi.Pa.S.A.M., encabezada por Fabricaciones Militares, que abastece a Somisa <sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Los años que figuran entre paréntesis significan la fecha del descubrimiento o puesta en explotación del yacimiento y/o área.

<sup>24</sup> Ciccari, María Rosa, "Caracterización de la dinámica económica de la cuenca San Jorge en los '90", en Salvia, Agustín y Panaia, Marta (comp.) *La Patagonia privatizada*, op.cit., p 195.

<sup>25</sup> Es la mina subterránea más grande de Latinoamérica, con 414 metros de profundidad y 98 km de longitud.

<sup>26</sup> El 98% del hierro que se extrae de Sierra Grande es consumido por la planta siderúrgica instalada en San Nicolás de los Arroyos (Bs.As.): Somisa (1971-1992). Paradójicamente, Menem en el cierre de su campaña electoral (1989), promete desde el socavón de la mina, la "revolución

La mina de Sierra Grande que comienza a producir en 1971, cierra por decreto presidencial en 1992, dejando a la población en una quimera y en el barrio de los ex mineros, hoy abandonado, se pergeña construir una cárcel extramuros<sup>27</sup>. El gobierno rionegrino se hace cargo de la mina en 1993, con el nombre de HI.Pa.R.S.A (Hierro Patagónico Rionegrino Sociedad Anónima); asume el compromiso de llevar adelante un proceso de privatización, administrando hasta recientemente la escasa producción. En 1991 son despedidos por Hierros Patagónicos<sup>28</sup>, 52 trabajadores provocando un corte de ruta por más de cinco días que cuentan con el apoyo de la Multisectorial Rionegrina. Más de doscientos manifestantes apostados en la ruta nacional 3, la obstruyen en reclamo por la reincorporación de los despedidos<sup>29</sup>. En todo esto, tienen un papel central las mujeres de los trabajadores, ya que adquieren un rol destacado en sus organizaciones o en sus espacios. Esta es apenas la parte visible de un fenómeno mucho más profundo, las nuevas relaciones que se establecen entre la mujer y el territorio que emerge de la reestructuración económica argentina en las últimas décadas. En este sentido, es interesante comentar que las mujeres de los mineros en el caso de Sierra Grande dan lugar a los primeros piquetes de la década (1991)<sup>30</sup>.

---

productiva”, en Testimonio Oral, H.M., estudiante de Historia y nativo de Sierra Grande, junio 2005.

<sup>27</sup> La población actual de la localidad de Sierra Grande es de alrededor de 6000 habitantes. Antes del cierre, luego de un crecimiento explosivo de los años '70, la localidad cuenta con 16000 habitantes. Con el cierre de la mina, en términos de explotación a partir de 1992, la localidad sufre un éxodo poblacional superior al 60%.

<sup>28</sup> Hierros Patagónicos Rionegrinos ( Hiparsa), es una empresa provincial con subsidios de 800 mil pesos anuales, con 40 empleados hacia 1993, año de su creación, en Díaz, Alejandra y Carreño, Nadine (2003), “La Sierra y su mina de hierro”, en <http://www.labardarevista.com.ar>.

<sup>29</sup> La prensa local y la nacional informan sobre los diferentes cortes que se producen en distintos momentos, en dos meses, sin concretar la reincorporación de los trabajadores. Uno de los motivos que impiden este reconocimiento legal es que no se resuelve en la Secretaria de Trabajo los certificados de Hiparsa, conduciendo a los empleados a denunciar las maniobras de la firma para provocar el despido, en *Río Negro*, General Roca, Río Negro, 17 al 22 de diciembre de 1999.

<sup>30</sup> En septiembre de 1991, las mujeres de Sierra Grande son protagonistas de un corte de ruta que se constituye en una de las primeras puebladas del país. Los estudiantes secundarios hacen una sentada en una escuela técnica y los obreros reclaman en Bs.As., por la continuidad de su fuente laboral, en Díaz, Alejandra y Carreño, Nadine, “La Sierra...”, op.cit y Hopstein, Graciela “Piqueteros: Dilemas e potencialidades de un movimiento que emergió a pesar del estado e a margen del mercado”, en *Mutitudes* (2004), Revista electrónica, 14.

La escasa población que resiste abandonar el lugar, recompone la actividad económica a través de una forma parcial de explotación turística de las Playas Doradas<sup>31</sup> y lo que es la mina, se destina a un tours para mostrar a los visitantes lo que fue la actividad productiva. Se denomina “viaje al centro de la tierra” y consiste en un descenso de setenta metros, que cada vez, tiene menos visitantes a raíz de un accidente. Hoy la población de Sierra Grande tiene 9.500 habitantes y, ante la inactividad minera, la reactivación económica pasa por la pesca, el turismo y la administración pública<sup>32</sup>. En definitiva, la mina se cierra, no se privatiza, no tiene inversor privado – hay que tener en cuenta que una mina es inviable sin el subsidio del estado –; sólo aparece en el horizonte un intento de un grupo empresario de origen chino<sup>33</sup>. Un testimonio dice al respecto “...cuando Somisa se privatiza, no quiere más pellets de Hipasam, porque se podía abastecer con el hierro brasileño que era de mejor calidad. No había posibilidad de exportar nuestro producto, eso acompañó la decisión nacional de no buscar comprador, sino directamente liquidarla”<sup>34</sup>.

La particular modalidad de privatización del complejo carbonífero de Río Turbio y el cierre de Hipasam-Sierra Grande, conjuga la presencia de contextos operativos de privilegio, escaso nivel de inversión, crecientes márgenes de explotación de los trabajadores y una débil y complaciente institucionalidad regulatoria. Conlleva nullos beneficios públicos, una considerable transferencia de recursos nacionales a manos privadas y una década de estancamiento en un aprovechamiento energético que adolece de la falta de una política integral que incluya el carbón<sup>35</sup>. Las consecuencias socioeconómicas de la reestructuración y privatización de empresas públicas acicatea a las familias que viven de la actividad minera con similares y diversos comportamientos de reproducción social

<sup>31</sup> La villa turística que se funda en los años '70, tiene un lento desarrollo hasta los noventa, momento en se integra a la ruta de la costa desde ese lugar hasta Puerto Madryn, pasando por Las Grutas y otros pequeños balnearios de reciente creación, uniendo más de 135 km.

<sup>32</sup> Díaz, Alejandra y Carreño, Nadine, “La sierra y su mina de hierro”, op.cit.

<sup>33</sup> En el momento de escribir este trabajo, la prensa local informa sobre la reactivación de la ex Hipasam, ahora Compañía minera Sierra Grande, con el objetivo de volver a extraer mineral, hecho que permite la incorporación de mano de obra local, en *Río Negro*, General Roca, Río Negro, junio de 2005, p.16.

<sup>34</sup> *Ibíd.*

<sup>35</sup> Nahon, Carolina, “La privatización de Yacimientos Carboníferos Fiscales: ¿negocios privados, subsidios y (des) control público?”, en *Realidad Económica* (2005), Bs.As., lade, 209,pp. 58-81.

que oscila en la necesidad de quedarse para la mujer y manifestación de buscar otro lugar para el hombre, pero permaneciendo en la cuenca , en un caso – Río Turbio – alejándose los hombres para obtener ingresos para el sustento familiar, en el otro caso – Sierra Grande – las mujeres resisten con hogares ‘sobrevivientes’<sup>36</sup> .

### **Reclamos y conflictos en un nuevos y viejos sectores productivos**

Otro recurso que tiene un significativo impulso y permanentemente convoca al conflicto, es la pesca. El crecimiento de la actividad desde fines de la década del '70 se incrementa en los noventa con las empresas radicadas en Chubut que solicitan licencias para el desarrollo de la actividad, lo que activa un convenio de reciprocidad, sumándose a las veinte compañías que desde 1990 operan en la costa santacruceña. Con relación a la pesca de altura que evoluciona de modo interesante en la década de los '80, dinamiza a Puerto Deseado demandando servicios y personal técnico especializado. A lo largo de estos años la participación de compañías subsidiarias de extranjeras aumenta, como así también la constitución de empresas mixtas integradas por capital argentino y extranjero, tendencia que se profundiza notablemente después de 1990. Es decir que, desde esos años, se inaugura un momento que da cuenta del cambio productivo provincial tras la crisis del carbón y de la ganadería, pero ligado a la actividad pesquera, que contrariamente a las anteriores es básicamente de capital privado<sup>37</sup>. Recordemos que en los años 1950 con las políticas desarrollistas y el proyecto de explotar y desarrollar la pesca comercial en la costa patagónica, se construye un puerto de aguas profundas San Antonio Este (SAE), Río Negro, ofreciendo ventajas impositivas para las sociedades interesadas en establecerse en la región lo que implica el desarrollo industrial con radicación de capitales

---

<sup>36</sup> Federico, Andrea, “Comportamientos familiares de reproducción social en Río Turbio”, en Salvia Agustín y Panaia, Marta (comp.), *La Patagonia privatizada...*, op.cit., pp.153-164.

<sup>37</sup> Bona, Aixa, “ Actividades económicas en Santa Cruz ( 1940-1990)”, en *El Gran Libro de Santa Cruz* (2000), Alfa. Además, ver Abalos y otros, “Análisis de la relación fuerzas sociales objetivas. Situación de los grupos sociales fundamentales en Santa Cruz”, en *Wasen. Economía y Sociedad*, (1994), Río Gallegos, 6.

nacionales (Galme, Pesquera Saic) y más tarde extranjeros, cuya producción se comercializa en el mercado interno y en centros europeos como España e Italia.

Actualmente existe una Cámara Argentina-Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIIC) y la Federación de los trabajadores de la Industria de Alimentos (FTIA). La primera, cercana al acuerdo en los conflictos con los grupos empresariales y la segunda, apunta a lograr que los incrementos salariales, sean semejantes a los del sindicato que obtuvo la mejor negociación. Entre el 20 de abril y fines del mes de mayo de 2005, se desenvuelve una disputa en el sector a partir de la movilización convocada y organizada por los trabajadores de Puerto Madryn, quienes convocan a acciones de protesta impidiendo el ingreso de insumos para las empresas productoras – mayoritariamente de capital extranjeros - , piquetes en la ruta nacional N° 3 y en las 1 y 4 provinciales, cerrando de esta manera la ciudad. Con el apoyo de la sociedad local los protagonistas denominan a esta acción como el segundo *madrinazo*<sup>38</sup>. Con la pretensión de regionalizar el conflicto los fileteros chubutenses, se concentran con gomas encendidas, frente a la planta Alpesca (SAO) y otro grupo de piquetes se dirige a la planta pesquera Tramar S.A. de Sierra Grande, con la pretensión de obtener una negociación de un salario mínimo como el obtenido por los trabajadores pesqueros de Comodoro Rivadavia<sup>39</sup>. El conflicto no se resuelve – en momentos de escribir este trabajo - por la intransigencia de todas las partes.

Por último, es necesario realizar algunas consideraciones sobre la situación de la fruticultura, recurso fundamental del Alto Valle de Río Negro durante décadas y los conflictos reeditados por los productores: “los tractorazos”, a partir de los años '90. Hacia mediados de esa década, producto de la resolución del conflicto con los estatales rionegrinos, se muestra con claridad el nexo entre poder económico y político en esta provincia, cuando el entrante gobernador, Pablo Verani (diciembre de 1995) acuerda con el apoyo del gobierno nacional la concesión del puerto de San Antonio Este a la más importante exportadora de

---

<sup>38</sup> Estas acciones colectivas tienen una repercusión local y nacional como no se daba desde 1984 cuando el pueblo madrylense, se vuelca al puerto para repudiar la presencia de naves norteamericanas, acontecimiento conocido como *Madrinazo*, en Oviedo, Luis (2005), *Prensa Obrera*, Bs.As., año 23, N° 897, p. 8.

<sup>39</sup> *La Nación*, 26/04/05; *Río Negro*, 07/05/05.

fruta: Expofrut<sup>40</sup>. Esta empresa, originalmente constituida por capitales regionales, pasa mayoritariamente a capital extranjero (de origen italiano). El grupo convertido en sociedad anónima, tiene su centro en el país europeo y un directorio local. Frente a esta concentración de capitales en el principal rubro del valle rionegrino, los pequeños y medianos productores, con unidades de producción entre 10 a 15 hectáreas, quedan desamparados, no sólo porque no hay política del estado provincial orientada a otorgan subsidios, sino porque no pueden competir ni hacer frente a las consecuencias de estas nuevas políticas que afectan negativamente la rentabilidad de las pequeñas explotaciones y de las empresas vendedoras de insumos y servicios independientes, limitando sus posibilidades de evolución; dificultando, asimismo, la reconversión hacia nuevos sistemas de plantación, de mayor rendimiento por unidad de superficie. En definitiva, los efectos de ciclos de la fruticultura, el salario de los trabajadores, los problemas del transporte y de la venta, hoy totalmente supeditados, a las condiciones del mercado y sobre todo, la imposibilidad financiera de ingresar tecnología adecuada para las nuevas condiciones de la oferta y la demanda. El productor es hoy el único sector dentro del rubro que no tiene paritaria y que en el contexto de las políticas de los años noventa, protesta contra el estado local y nacional a través de los “tractorazos”, - corte de la ruta con los tractores-, siendo el primero de ellos en 1993, - que finaliza con el procesamiento de tres de los que lideran la protesta -; luego en 1995 y 1999 – momento que aparece el Movimiento de Mujeres en Lucha -. En general, estas protestas de los productores terminan judicializadas y direccionadas por el propio gobierno local<sup>41</sup> o con subsidios de la Nación que llegan en parte y retaceados<sup>42</sup>.

### **Reflexiones provisorias**

Si bien la democracia logra subsistir luego de sortear obstáculos serios y dista de representar un punto de llegada satisfactorio, las acciones de protestas la

<sup>40</sup> Si bien, la devaluación permite la recuperación de dos empresas importantes del valle como son Tres Ases y Moño Azul, es Expofrut la más importante, tiene 5000 hectáreas en el Alto Valle de Río Negro, galpones, insumos y apoyo financiero.

<sup>41</sup> Nos referimos a la protesta de los productores de 1999, al frente de la cual se coloca el mismo gobernador Pablo Verani.

<sup>42</sup> Testimonio Oral. C.C., productor del Alto Valle, junio de 2005.

ponen a prueba cotidianamente enfrentando el sistema político como estrategia, en general, de procesamiento del ajuste estructural. Este es un elemento relevante que se observan en Argentina a partir de los años '90.

En la región, a lo largo de los esos años se da inicio a un ciclo de protestas sociales, que no están guiadas por el cuestionamiento a las políticas neoliberales: reforma en los estados provinciales, ajuste fiscal y privatización, sino ante las consecuencias de la aplicación de las mismas. El repertorio -colección de sentidos que irrumpen en una lucha de forma relacional - de acciones colectivas en defensa o prosecución de intereses compartidos se nos presentan en el escenario patagónico como conjunto de acciones, como creaciones culturales que emerge de la lucha, de las interacciones entre ciudadanos y estado<sup>43</sup>. Se observan dos intereses: el cambio estructural en la protesta y las modificaciones en la cultura de la lucha popular<sup>44</sup>. Por ello, las nuevas ( y viejas) formas de la beligerancia durante la última década, cuando la fábrica se cierra o se privatiza, tienen en el corte de rutas provinciales y/o nacionales – lugar por donde transita la riqueza - la modalidad predominante de la lucha colectiva y cuando el estado se desplaza de la función de proveedor de bienestar -educación y salud- y se atrasa en el pago de los salarios, la retención de servicios, la huelga y la ocupación de edificios públicos es la modalidad reiterada y constante.

En la década del noventa, las escasas fábricas instaladas en los parques industriales de la Patagonia, que paralizan la producción o reducen sus plantillas de operarios y obreros, provocan la disminución de reclamos por aumentos salariales, no obstante, se redoblan las demandas por salarios adeudados y por despidos. En otro contexto, en el 2005, la reactivación de las exportaciones primarias y una balanza comercial con superávit re-sitúa en el cenáculo de la lucha de la fuerza laboral a la huelga, combinada y complementada con piquetes frente a la empresa productora, tal es el caso de las acciones colectivas de los trabajadores la industria pesquera patagónica que reclaman una más justa

<sup>43</sup> Tilly, Charles, *The contentious French*, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1986, citado por Auyero, Javier, "Los cambios en el repertorio de la protesta social en Argentina", en *Desarrollo Económico* (2002), Bs.As., Ides, 166..

<sup>44</sup> Tarrow, Sidney, "The People's Two Rhythms; Charles Tilly and the Study of Contentious Politics", *Comparative Studies in Society and History*, 1996, pp 586-600, citado por Auyero, Javier, "Los cambios...", op.cit.

distribución del ingreso. Por lo tanto, visualizamos desde nuestro análisis empírico que no sólo existe una falsa dicotomía entre los cortes y las huelga<sup>45</sup>, sino además, las diversas modalidades de acción, en el espacio de estudio, son variaciones que se relevan, conviven, complementan y potencian de acuerdo con un relativo éxito o fracaso en la obtención de las demandas, evidenciándose una coexistencia de formas establecidas de protesta con otras re-emergentes - en los años setenta los productores valletanos cortan la ruta nacional - pero son otros los sujetos sociales.

En definitiva, en la Patagonia se da una variedad de estrategias para protestar. Protestas que, por la intensidad y generalización, se convierten en conflictos sociales y políticos. Conflictos de los obreros de las empresas privatizadas y de las que cierran, con desocupados, reinsertados y empleados públicos y movilización, resistencia y huelgas de los empleados estatales frente al ajuste. Por último, el reclamo salarial del nuevo sector productivo patagónico, lleva a dos modalidades de resistencia, por una parte, la tradicional huelga en los puertos y por otra, el piquete frente a la fábrica.

---

<sup>45</sup> Auyero, Javier (2002), "Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina", en *Desarrollo Económico*, Bs.As., Ides, 166.

